

**JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  
NÚMERO CUATRO  
DE MÁLAGA**

**PROCEDIMIENTO:** Procedimiento de Protección de Derechos Fundamentales 257/16

**SENTENCIA NÚMERO 533/16**

En la ciudad de Málaga, a 18 de noviembre de 2016.

Don David Gómez Fernández, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número cuatro de los de Málaga, pronuncia

**EN NOMBRE DE SU MAJESTAD EL REY**

La siguiente

**S E N T E N C I A**

Vistos los presentes autos de Procedimiento de Protección de Derechos Fundamentales número 257 de los de 2016, seguidos por derecho fundamental de participación política, en los cuales han sido parte, como recurrente D. [REDACTED] representado por la Procuradora Sra. Berjano Albert y asistido por el Letrado Sr. Alcalá Belón, y como Administración recurrida el Excelentísimo Ayuntamiento de Marbella, con la representación de la Procuradora Sra. Chacón Aguilar y la asistencia del Letrado Sr. Miranda Perles; habiendo igualmente intervenido en el procedimiento el Ministerio Fiscal.

**ANTECEDENTES DE HECHO**

**Primero.-** Por la Procuradora Sra. Berjano Albert, en nombre y representación de D. [REDACTED] se presentó en el Decanato de los Juzgados de Málaga escrito de interposición de recurso contencioso administrativo, a tramitar por el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona, frente a “los actos administrativos del Ayuntamiento de Marbella que, mediante su silencio, impide a los Sres. Concejales del de la oposición el acceso” a la documentación solicitada por el recurrente, consistente en:

a) la enunciada en escrito presentado el día 14 de septiembre de 2015, por la que solicitaba el acceso y copia a los expedientes administrativos de contratación (pliegos de condiciones técnicas y administrativas y publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga) de las casetas y barras, las atracciones-infantiles, mayores, puestos de venta ambulante y menores-, las diferentes carpas que se tenía previsto contratar así como la ubicación de las mismas, y de los artistas que se pretendía contratar relativos a la feria y fiestas de San Pedro de Alcántara de 2015 (escrito presentado con número de registro de entrada MARB-E-2015062992).

b) la enunciada en escrito presentado el día 14 de septiembre de 2015, por la que solicitaba el acceso y copia al expediente administrativo relativo a la autorización de los propietarios

Código Seguro de verificación: y8GUopNszTWpKR+ICw4EXg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws121.juntadeandalucia.es/verifirmav2/>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	DAVID GOMEZ FERNANDEZ 21/11/2016 10:11:09	FECHA	21/11/2016
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	PÁGINA	1/22



y8GUopNszTWpKR+ICw4EXg==

de los terrenos en los que se venían realizando trabajos para la nueva ubicación de la feria y fiestas de San Pedro de Alcántara de 2015, así como de los vertidos de tierras que se venían realizando (escrito presentado con número de registro de entrada MARB-E- 2015062995).

c) la enunciada en escrito presentado el día 7 de octubre de 2015, por la que solicitaba se informase al recurrente acerca de la empresa o empresas que estaban llevando a cabo los trabajos de arreglos de arquetas, acerado, canalizaciones de agua y saneamiento en la parcela en la que se ubicaría la feria de San Pedro de Alcántara de 2015, así como el acceso y copia al expediente administrativo de contratación de aquellas (escrito presentado con número de registro de entrada MARB-E- 2015068850).

d) la enunciada en escrito presentado el día 7 de octubre de 2015, por la que solicitaba se informase al recurrente acerca de los motivos por los que venían realizándose trabajos en la parcela en la que en ediciones pasadas se habían ubicado las casetas de la feria y fiestas de San Pedro de Alcántara, así como el acceso y copia al expediente administrativo donde constase la autorización de la propiedad del terreno para realizar los mismos (escrito presentado con número de registro de entrada MARB-E- 2015068831).

e) la enunciada en escrito presentado el día 7 de octubre de 2015, por la que solicitaba el acceso y copia de los expedientes relativos a la autorización de los propietarios de los terrenos donde se ubicaría la feria y fiestas de San Pedro de Alcántara de 2015, así como el relativo a los vertidos de tierras realizados, al no haber ejecutado trámite alguno al respecto la Concejalía de Medio Ambiente, como comunicó al recurrente el 22 de septiembre de 2015 (escrito presentado con número de registro de entrada MARB-E- 2015068844).

f) la enunciada en escrito presentado el día 7 de octubre de 2015, por la que solicitaba el acceso y copia de los expedientes relativos a la autorización de los propietarios de los terrenos donde se ubicaría la feria y fiestas de San Pedro de Alcántara de 2015, así como el relativo a los vertidos de tierras realizados, al no haber ejecutado trámite alguno al respecto la Concejalía de Medio Ambiente, como comunicó al recurrente el 22 de septiembre de 2015 (escrito presentado con número de registro de entrada MARB-E- 2015068839).

g) la enunciada en escrito presentado el día 7 de octubre de 2015, por la que solicitaba se informase al recurrente en la fecha en la que comenzaron los trabajos de electricidad que se venían realizando en la parcela donde en ediciones pasadas se habían ubicado las casetas de la feria y fiestas de San Pedro de Alcántara de 2015, sita en la Avenida Pablo Ruiz Picasso China con la Avenida Jorge Guillén (escrito presentado con número de registro de entrada MARB-E- 2015068828).

h) la enunciada en escrito presentado el día 7 de octubre de 2015, por la que solicitaba se copia del plan de seguridad de los cuerpos y fuerzas de seguridad, así como el plan de autoprotección y coordinación de los fuegos artificiales, con motivo de la celebración de la feria y fiestas de San Pedro de Alcántara de 2015 (escrito presentado con número de registro de entrada MARB-E- 2015068825).

i) la enunciada en escrito presentado el día 13 de octubre de 2015, por la que solicitaba se informase al recurrente si se habían realizado estudios geotécnicos de las zonas afectadas donde se ubicaría la feria de San Pedro de Alcántara, y, caso de haberse realizado dichos estudios, el resultado de aquellos con copia de los mismos (escrito presentado con número de registro de entrada MARB-E- 2015069933).



Código Seguro de verificación: y8GUopNszTWpKR+ICw4EXg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws121.juntadeandalucia.es/verifirmav2/>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	DAVID GOMEZ FERNANDEZ 21/11/2016 10:11:09	FECHA	21/11/2016
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	PÁGINA	2/22



y8GUopNszTWpKR+ICw4EXg==

j) la enunciada en escrito presentado el día 23 de octubre de 2015, por la que solicitaba se informase al recurrente acerca de los motivos del desalojo de la feria de San Pedro de Alcántara la madrugada del 18 de octubre de 2015, si se realizaron informes por parte de la policía local, cuerpo de bomberos y protección civil acerca de tal desalojo, con copia de los mismos, caso de existir, y qué concretas mandos se encontraban al frente de la policía local, cuerpo de bomberos y protección civil (escrito presentado con número de registro de entrada MARB-E- 2015072631).

k) la enunciada en escrito presentado el día 23 de octubre de 2015, por la que solicitaba se informase al recurrente acerca del procedimiento realizado para la ampliación del contrato de la autorización de uso común especial sobre los terrenos destinados a las atracciones mecánicas y actividades feriales con motivo de la feria y fiestas de San Pedro de Alcántara de 2015 del día 22 de octubre hasta el 25 de octubre de dicho mes (escrito presentado con número de registro de entrada MARB-E- 2015072639).

l) la enunciada en escrito presentado el día 23 de octubre de 2015, por la que solicitaba se informase al recurrente acerca del procedimiento realizado para la ampliación del contrato de iluminación con motivo de la feria y fiestas de San Pedro de Alcántara de 2015 del día 22 de octubre hasta el 25 de octubre de dicho mes (escrito presentado con número de registro de entrada MARB-E- 2015072629).

m) la enunciada en escrito presentado el día 20 de abril de 2016, por la que solicitaba acceso y copia al expediente donde se recogiese el procedimiento seguido para la ampliación del contrato de la autorización de uso común especial sobre los terrenos destinados a las atracciones mecánicas y actividades feriales con motivo de la feria y fiestas de San Pedro de Alcántara de 2015 del día 22 de octubre hasta el 25 de octubre de 2015 (escrito presentado con número de registro de entrada MARB-E- 2016025116).

**Segundo.-** Convenientemente turnado dicho escrito, recae el conocimiento del mismo en este Juzgado, dictándose por la Sra. Letrada de la Administración de Justicia de este Juzgado Diligencia de Ordenación admitiendo a trámite el recurso, ordenando la sustanciación de la cuestión por los trámites del procedimiento de Protección de Derechos Fundamentales, teniendo por personada a la parte y ordenando reclamar de la Administración demandada el expediente administrativo y el emplazamiento de interesados. Recibido el expediente administrativo se dictó Decreto mandando seguir las actuaciones por el trámite del procedimiento de Protección de Derechos Fundamentales por la cual se ordenó su entrega a la parte actora para que la misma formalizase a la vista de aquel demanda por plazo de ocho días.


**Cuarto.-** Verificada la entrega y posterior devolución del expediente administrativo así como la formalización de la demanda en plazo, se solicitó el dictado de Sentencia por la que se acordase que la “actuación” del Ayuntamiento de Marbella no es conforme a derecho, por vulneración del derecho fundamental del Concejal al acceso a la información, artículo 23 de la Constitución Española, condenándose al Ayuntamiento demandado al pago de las costas. Se ordenó por Diligencia de Ordenación dar traslado de la misma al Ministerio Fiscal y a la Administración demandada por idéntico plazo para formalizar contestación o escrito, lo que se verificó en tiempo y forma.

**Quinto.-** Por Decreto dictado por la Secretaría de este Juzgado el día 9 de septiembre de 2016 se fijó la cuantía del proceso en la de indeterminada; acordándose, a su vez, mediante



Código Seguro de verificación: y8GUopNs zTWpKR+ICw4EXg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws121.juntadeandalucia.es/verifirmav2/>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	DAVID GOMEZ FERNANDEZ 21/11/2016 10:11:09		FECHA	21/11/2016
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	y8GUopNs zTWpKR+ICw4EXg==	PÁGINA	3/22



y8GUopNs zTWpKR+ICw4EXg==

Auto dictado el 13 de septiembre de 2016, no recibir el pleito a prueba y otorgar a las partes un plazo de diez días para la formulación de conclusiones escritas. Una vez transcurrió el plazo enunciado y presentados, en su caso, escrito de conclusiones por las partes, quedaron los Autos pendientes del dictado de Sentencia. Mediante Providencia dictada el día 23 de septiembre de 2016 se acordó por el Juzgado, al hacer uso de la facultad contemplada en el artículo 33.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, otorgar a las partes un plazo común de diez días para que pudiesen formular por escrito las alegaciones que estimasen oportunas respecto de posibles motivos apuntados -sin prejuzgar el fallo-, que pudieran fundamentar la oposición al recurso. Presentados los correspondientes escritos, quedaron los autos en situación de resolver mediante Diligencia de 17 de octubre del corriente.

**Sexto.-** Que en el presente procedimiento se han cumplido todas las formalidades legales .

### FUNDAMENTOS DE DERECHO

**Primero.-** En el presente litigio se formula recurso contencioso administrativo para la Protección de Derechos Fundamentales frente, según se refería en el escrito inicial- a “los actos administrativos” del Ayuntamiento de Marbella por el que “mediante su silencio se impide” al recurrente “el acceso a la siguiente documentación o información” (toda la enunciada en el antecedente de hecho primero, consistente en la solicitada en los 13 escritos reseñados). Se opone que dichos “actos administrativos” vulneran el derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la Constitución Española en su vertiente al derecho fundamental a la participación política. Ya en la demanda, la parte actora refiere que el Concejal recurrente realizó tales solicitudes de información en diferentes fechas (14 de septiembre, 7 de octubre, 13 de octubre y 23 de octubre de 2015, así como 20 de abril de 2016), y que, por su parte, la Administración realizó varias contestaciones consistentes en indicar al Concejal que se le daba traslado al Departamento correspondiente. Y “a partir de ahí el silencio más absoluto desde que el juzgado pide el expediente administrativo”. A lo anterior se añadía en el fundamento de derecho noveno -dedicado al “objeto del recurso”- que se impugnaban “las actuaciones administrativas” por las que se vulnera el derecho fundamental a la participación política del recurrente, citando como aplicable el artículo 25.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Igualmente se refería que “la petición ha sido concedida pero no se hace efectiva”. La Administración, por su parte, opuso la concurrencia de causa de inadmisibilidad consistente en la interposición extemporánea del recurso conforme a lo previsto en los artículos 115 y 69.e) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. A tal efecto, razona que toda vez que los artículos 14 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y 77 de la Ley de Bases de Régimen Local asocian al silencio administrativo un efecto positivo, el recurso debió formularse, como máximo, en el plazo de 10 días desde la expiración del de los cinco establecidos para resolver. A ello añade, de forma subsidiaria, la inexistencia de vulneración del derecho a la información, toda vez que se estimó su pretensión por silencio administrativo y se puso a disposición del solicitante la información requerida. Por su parte, Ministerio Fiscal informó favorablemente la estimación del recurso y se opuso a la concurrencia de la causa de inadmisibilidad opuesta por la Administración.

**Segundo.-** Ha de efectuarse, con carácter previo, una mención a los escritos presentados por las partes como consecuencia del tenor de la Providencia dictada por este Juzgado el día 23 de septiembre del corriente. En la misma se exponía la posible concurrencia de causas de



Código Seguro de verificación: y8GUopNszTWpKR+ICw4EXg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws121.juntadeandalucia.es/verifirmav2/>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	DAVID GOMEZ FERNANDEZ 21/11/2016 10:11:09	FECHA	21/11/2016
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	PÁGINA	4/22



y8GUopNszTWpKR+ICw4EXg==

inadmisibilidad no alegadas por la parte demandada consistentes en la posible impugnación de un acto administrativo o inactividad inexistentes, y, por tanto, no susceptibles de impugnación (artículo 69.1.c) y la impugnación de un acto administrativo positivo por el que resulta beneficiado por el mismo, careciendo a tal efecto de legitimación activa (artículo 69.1.b).


A tal efecto se razonaba que del tenor del propio escrito de interposición ( en el que literalmente se identificaba la actuación impugnada como “los actos administrativos del Ayuntamiento de Marbella por los que, mediante silencio, se impide a los Sres. Concejales de la oposición el acceso a la siguiente documentación o información, con vulneración del derecho fundamental del artículo 23 de la Constitución Española”) se infería, al menos en principio, que el objeto de recurso era la desestimación presunta de las solicitudes formuladas en su día por el recurrente, en su condición de Concejales de una Corporación Local, para acceder a una informaciones que obraban en poder de esta última (todas las referidas en el primero de los antecedentes de hecho). Sin embargo, se exponía como el artículo 14 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales anudaba a la ausencia de respuesta a tales solicitudes dentro del plazo de cinco días la estimación de aquellas, estando, por tanto, ante un supuesto de silencio administrativo positivo (que, a la vista de lo dispuesto en el artículo 43.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común entonces vigente, comportaba la producción de un “acto administrativo finalizador del procedimiento” a todos los efectos). Así pues, si lo que se pretendía impugnar por el recurrente era varios actos administrativos presuntos desestimatorios, solo se podría concluir que atacaban unos supuestos actos inexistentes -y, por tanto, no susceptibles de impugnación- pues, en tal caso, lo que la parte recurrente consideró que constituían sendas desestimaciones de sus solicitudes (razón por la que, aparentemente, las impugnaba) realmente eran estimaciones de aquellas; lo que, a su vez, conducía a cuestionar la propia legitimación activa de la parte actora (por no ostentar interés legítimo alguno en la revocación de varios actos que accedían a sus pretensiones).

De las alegaciones presentadas por la parte actora tras el dictado de dicha Providencia (presentadas en fecha 28 de septiembre de 2016) se desprende que, en realidad, lo que la misma pretendía recurrir no era la desestimación por silencio de su solicitud inicial de información, sino, en cambio la “falta de ejecución del silencio positivo” -ha de entenderse que el producido por la ausencia de respuesta a la referida solicitud de acceso-; extremo igualmente apreciado por el Ministerio Fiscal, que sostiene que, en realidad, “lo que se recurre es la no ejecución por parte de la Administración, el Ayuntamiento de Marbella, de un acto administrativo firme previamente obtenido por silencio administrativo positivo, y por tanto la falta de entrega de la documentación solicitada”. Si así es, claramente no concurren las causas de inadmisibilidad apuntadas respecto a la falta de legitimación o a la inexistencia de los actos administrativos presuntos, como tampoco lo sería la de extemporaneidad que se opone por la Administración (como a continuación se razona).

No obstante, es necesario poner de manifiesto que esta cuestión no resulta fácilmente deducible de los escritos presentados hasta ese momento por la parte actora. En primer lugar, porque en el propio escrito inicial, tal y como se refería en la providencia de 23 de septiembre, la parte identificaba el objeto del recurso de la siguiente forma: “los actos administrativos del Ayuntamiento de Marbella por los que, mediante silencio, se impide a los Sres. Concejales de la oposición el acceso a la siguiente documentación o información, con vulneración del derecho fundamental del artículo 23 de la Constitución Española”. En



Código Seguro de verificación: y8GUopNsZWpKR+ICw4EXg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws121.juntadeandalucia.es/verifirmav2/>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	DAVID GOMEZ FERNANDEZ 21/11/2016 10:11:09		FECHA	21/11/2016
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	y8GUopNsZWpKR+ICw4EXg==	PÁGINA	5/22
 y8GUopNsZWpKR+ICw4EXg==				





segundo lugar porque, como previamente se ha referido, en su demanda la parte citaba en su fundamento de derecho noveno como aplicable el artículo 25.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (referente a “los actos expresos y presuntos de la Administración pública”). Y, por último, en tercer lugar porque la totalidad de jurisprudencia constitucional que se enuncia en el fundamento de derecho décimo primero de la demanda para justificar que el recurso se formula dentro del plazo del artículo 115 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (se afirma que el plazo se “encuentra abierto”), se refiere a esta cuestión cuando los recursos contencioso-administrativos se interponen contra la desestimación por silencio administrativo de solicitudes o reclamaciones, recordando todas las Sentencias citadas -a las que cabría añadir la trascendente Sentencia del Tribunal Constitucional 52/2014, de 10 de abril- tanto el carácter de mera ficción legal del silencio administrativo de carácter negativo, como la inexistencia de obligación por parte del ciudadano de recurrir en todo caso “una desestimación presunta”, “so pretexto de convertir su inactividad en consentimiento del acto presunto”. En definitiva, la identificación de la actuación, actividad o inactividad administrativa impugnada que se realizaba hasta ese momento no indicaba, desde luego, que lo que se atacase fuera lo que sostiene la parte actora en su escrito de 28 de septiembre, pues, de hecho, todo indicaba que atacaba un inexistente silencio desestimatorio de su pretensión (es más, así lo admite incluso la propia parte recurrente, al afirmar en este último que “nos parece claro que el recurso contencioso puede dar lugar a equívoco”). En definitiva, atendiendo a lo expresado finalmente por la parte, y entendiendo (en la interpretación más favorable del derecho al acceso a la jurisdicción del recurrente) que la identificación realizada resultaba simplemente errónea o defectuosa, ha de concluirse que constituye objeto del recurso la inactividad de la Administración, al no proceder a ejecutar los actos administrativos firmes previamente producidos por silencio positivo, mediante los cuales se estimó la pretensión del recurrente respecto del acceso a las informaciones solicitadas en los trece escritos previamente aludidos.

**Tercero.-** En consecuencia, no concurren las causas de inadmisibilidad antes aludidas respecto de inexistencia de acto administrativo, ni tampoco la de extemporaneidad del recurso que suscita la parte demandada. Y ello por cuanto la Administración pretende efectuar el cómputo del plazo de diez días al que alude el artículo 115 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa desde la fecha en la que ha de entenderse transcurrido el plazo para el dictado de la resolución conforme al artículo 14 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, circunstancia esta que resultaría plenamente acertada si lo que se atacase, como se ha referido anteriormente, fuese un acto presunto, y no, como aclara la parte actora en el escrito presentado el 28 de septiembre, la ausencia de ejecución de los actos administrativos producidos por silencio tras transcurrir cinco días desde la presentación de cada una de las solicitudes. En este caso, el plazo de diez días habría de computarse, en su caso, y a la vista de lo dispuesto en el artículo 115.1, una vez transcurridos veinte desde la solicitud de ejecución, circunstancia por la cual no puede entenderse (ante la inexistencia de tal solicitud previa) que el recurso se formulase fuera de plazo, y ello máxime cuando la inactividad a la que se alude en el recurso (ausencia de ejecución de las autorizaciones de acceso a la información en su día solicitada) ha venido desplegando sus efectos de forma continuada desde la existencia de los actos presuntos estimatorios hasta la propia interposición del recurso.

No obstante, la conclusión alcanzada respecto al objeto de impugnación en este recurso pudiera no resultar excesivamente halagüeña para la prosperabilidad de la demanda. Y ello



Código Seguro de verificación: y8GUopNszTWpKR+ICw4EXg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws121.juntadeandalucia.es/verifirmav2/>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	DAVID GOMEZ FERNANDEZ 21/11/2016 10:11:09	FECHA	21/11/2016
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	PÁGINA	6/22



y8GUopNszTWpKR+ICw4EXg==

por cuanto, tal y como se indicaba en la providencia de 23 de septiembre, si lo que se recurre (extremo confirmado por el propio recurrente en su escrito) es la inactividad de la Administración demandada por no ejecutar los actos administrativos firmes previamente producidos u obtenidos por silencio positivo, no consta que aquel formulase previamente una solicitud o reclamación a la Administración solicitando la ejecución de los actos ganados u obtenidos por silencio (es decir, el cumplimiento de la obligación de acceso). Como se ha referido, tales solicitudes de ejecución de dichos actos (al menos, de gran parte de ellos) no constan realizadas a la Administración en el expediente (ostensiblemente incompleto, por otra parte, sin que ni demandante ni demandada solicitasen su ampliación o complemento), ni las misma se han aportado junto con la demanda, aunque consistieren en una solicitud formulada de forma imprecisa o meramente reiterativa de la anterior. En este punto alegó la parte actora en el escrito presentado el día 28 de septiembre de 2016 (folio segundo) que “en los puntos 1, 2, 3 y 10 del recurso contencioso se explica que se ha reiterado la solicitud de información”, añadiendo a continuación que “se solicita en septiembre y se reitera en octubre”. Tal alegación no puede ser acogida -al menos íntegramente- por el siguiente motivo. Probablemente por la gran cantidad de solicitudes en su día presentadas por el concejal recurrente, la parte actora parece identificar en dichos puntos de la demanda las solicitudes de información presentadas el 14 de septiembre de 2015 con las de 7 de octubre de 2015. Pero basta dar lectura al primero de los antecedentes de hecho de la presente resolución para constatar como el día 14 de septiembre no se presentan tres escritos (sino dos) y el día 7 de octubre no se presentan tres escritos (sino seis), resultando diferente la información solicitada en al menos siete de ellos (bastando una lectura de aquellos para constatar esta circunstancia). No obstante lo anterior, es cierto que los escritos presentados el 7 de octubre de 2015 enunciados bajo los epígrafes e) y f) del primero de los antecedentes de hecho resultan reiterativos respecto de la información solicitada en el escrito presentado el 14 de septiembre de 2015 referido bajo el epígrafe b). De la misma forma, la solicitud de información presentada el día 23 de octubre de 2015 a la que se alude en el hecho décimo de la demanda y en el epígrafe k) del primer antecedente de hecho de esta resolución, aparece reiterada mediante la presentación de un escrito en fecha 20 de abril de 2016 (el enunciado en el epígrafe m) del tan citado primer antecedente de hecho). Pues bien, aun cuando pudiera interpretarse (de forma ciertamente generosa) que en dichos escritos más que reiterarse la solicitud de información, se estaba pidiendo la ejecución de los actos presuntos estima to y los producidos por la falta de contestación a las solicitudes presentadas los días 14 de septiembre y 23 de octubre antes referidas; lo cierto y verdad es que existirían ocho solicitudes de información respecto de la que no existe ni reiteración ni solicitud alguna de ejecución (las enunciadas en los epígrafes a, c, d, g, h, i, j y l), sin que, desde luego, la reiteración de las dos solicitudes antes referidas pueda entenderse como una solicitud genérica de ejecución de todos y cada uno de los actos administrativos presuntos estimatorios producidos (consecuencia de la falta de resolución denegatoria en el plazo de cinco días desde la presentación de las correspondientes solicitudes).

**Cuarto.-** No obstante lo anterior, sostiene el demandante que la Administración no le había comunicado el plazo de resolución de la solicitud presentada ni los efectos del silencio, extremo que exige el artículo 42.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y que “supone dejar abierto el plazo para recurrir”. Además, añade que no dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 58.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, indicando si el acto era definitivo y los recursos que procedían frente al mismo (refiriendo literalmente a continuación lo siguiente: “por ejemplo podría haber indicado que debíamos utilizar el artículo 29.2 de la Ley de la Jurisdicción



Código Seguro de verificación: y8GUopNs zTWpKR+ICw4EXg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws121.juntadeandalucia.es/verifirmav2/>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	DAVID GOMEZ FERNANDEZ 21/11/2016 10:11:09	FECHA	21/11/2016
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	PÁGINA	7/22



y8GUopNs zTWpKR+ICw4EXg==


Contencioso-Administrativa”), entendiendo que era deber de la Administración informar al administrado que debía actuar de conformidad con el artículo 29.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (y que el incumplimiento del pretendido deber “debe tener consecuencias” para la Administración), añadiendo, finalmente que “la falta, matizable en este caso en el que existen dos escritos de esta parte, del requisito del artículo 29.2 no debe ser trascendente”.

Parte las tales argumentaciones desplegadas por la actora no pueden ser compartidas. Es cierto que la Administración no dio cumplimiento a los deberes reflejados en los artículos 42.2 y 58.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común a los que se alude por el recurrente. E igualmente lo es que, como ha declarado reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional (a.e. Sentencia del Tribunal Constitucional 52/2014, de 10 de abril, citando al respecto las anteriores con número 86/1998, de 21 de abril, 71/2001, de 26 de marzo, y 188/2003, de 27 de octubre) “la Administración no puede verse beneficiada por el incumplimiento de su obligación de resolver expresamente en plazo solicitudes de los ciudadanos, deber éste que entronca con la cláusula del Estado de Derecho (art. 1.1 de la Constitución Española), así como con los valores que proclaman los artículos 24.1, 103.1 y 106.1 de la Constitución Española”. Mas en lo que respecta a este concreto supuesto, tales incumplimientos no han propiciado una ventaja a la Administración, como se razona a continuación. Respecto de la ausencia de instrucción del plazo para resolver y el sentido del silencio, ninguna indefensión han podido originar al recurrente. Dificilmente puede aseverarse que el no haberse expuesto dicha información al demandante comportase algún efecto perjudicial para aquel, ni tampoco una ventaja para la Administración, a la vista del tenor literal de las propias solicitudes presentadas, en las que literalmente se afirma lo siguiente: “al amparo de lo establecido en el artículo 14 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, .....la petición de acceso a las informaciones se entenderá concedida por silencio administrativo en caso de que el Presidente o la Junta de Gobierno Local no dicten resolución o acuerdo denegatorio en el término de cinco días, a contar desde la fecha de la solicitud”. De la lectura de aquellas tan solo puede concluirse que el Concejal demandante era plenamente consciente tanto del plazo que disponía la Corporación para resolver cada una de sus solicitudes, como del efecto jurídico que se derivaba de la ausencia del dictado de resolución en dicho plazo denegando las mismas (pues lo contrario supondría afirmar que aquel no dio lectura a las solicitudes que presentó, extremo del todo inconcebible).

De la misma forma, la ausencia de la indicación del carácter definitivo de los actos presuntos y de los recursos a formular frente a los mismos (habría que cuestionarse acerca de qué recursos debiera ser instruido el solicitante para el caso de entender estimada su pretensión por silencio, pues la formulación de aquellos resulta incoherente con su propia pretensión) pudiera haber comportado una ventaja para la Administración si, en su caso, esta hubiera pretendido oponer en el proceso judicial que los actos que se recurren no ponen fin a la vía administrativa o denegar la admisión de recursos administrativos por extemporáneos -para el caso que se excediera el plazo correspondiente por dicha ausencia de instrucción-. Mas ninguna de estas se compadece con la situación objeto de enjuiciamiento. Los actos administrativos eran definitivos, y la parte nunca pretendió formular recurso frente a aquellos (o, al menos, no consta esta circunstancia en el expediente ni con la demanda). De la misma forma, no resulta atendible tratar de identificar la obligación de instrucción de recursos (contemplada en el artículo 58.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo



Código Seguro de verificación: y8GUopNsZWpKR+ICw4EXg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws121.juntadeandalucia.es/verificamv2/>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	DAVID GOMEZ FERNANDEZ 21/11/2016 10:11:09		FECHA	21/11/2016
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	y8GUopNsZWpKR+ICw4EXg==	PÁGINA	8/22
				
y8GUopNsZWpKR+ICw4EXg==				



Común) con la de informar al recurrente que, para el caso que desear accionar frente a la ausencia de ejecución de los actos presuntos estimatorios, debía formular previas solicitudes de ejecución al amparo del artículo 29.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Ni estas solicitudes de ejecución constituyen propiamente recursos (teniendo estos últimos por objeto solicitar la revisión del acto recurrido, y no solicitar su ejecución) ni el deber de información de la Administración a los administrados puede llevarse hasta el extremo de que la primera deba contemplar a tales efectos toda posible actuación de los segundos frente a un acto expreso o presunto, inactividad o actuación en vía de hecho.

**Quinto.-** No obstante todo lo anterior, resta por analizar si, como propugnan tanto la parte actora como el Ministerio Fiscal, la omisión de las previas solicitudes de ejecución del acto firme a la que alude el artículo 29.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (al menos en buena parte de ellos) puede o no considerarse “trascendente” para admitir a trámite el recurso; es decir, si su ausencia comporta la de la inactividad que es objeto de recurso y cuya anulación se pretende.


Y en este punto (poniendo de manifiesto, en buena medida, que la Providencia de 23 de septiembre no prejuzgaba el sentido del fallo) el que suscribe la presente resolución va a apartarse de la tesis que planteó a las partes al amparo del artículo 33.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Y ello por concluir, finalmente, que si bien la ausencia de tal requerimiento previo es requisito imprescindible para poder ejercitar la “acción de inejecución” del artículo 29.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa por el cauce del procedimiento abreviado; al no comportar su inexistencia la correlativa de la inactividad que es objeto de recurso, y erigirse la ausencia de la citada en en motivo desproporcionado para acordar la inadmisión del recurso a la vista de las circunstancias que finalmente concurren respecto de buena parte de las inactividades atacadas, el principio pro actione impone, en este procedimiento especial, que el recurso sea tramitado. Y estos últimos extremos son los verdaderamente trascendentes, pues la inadmisibilidad del recurso tan solo podría decretarse cuando tal decisión no pudiera ser considerada de excesivamente formalista, rigorista o desproporcionada (y así lo sería, al menos, en buena parte de aquellos).

En esta dirección apunta la Sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga de 26 de febrero de 2008 (recurso 594/2001, ponente Ilmo. Sr. García Bernaldo de Quirós) que, al abordar precisamente esta cuestión, razona lo siguiente: “ Formulada la inadmisibilidad por falta de la práctica del requerimiento en vía administrativa para poder actuar contra la inactividad debemos hacer los siguientes pronunciamientos...El párrafo segundo del artículo 29 contempla el supuesto de falta de ejecución de la Administración de sus propios actos firmes. Y aquí el trámite previo al proceso se contempla con la siguiente fórmula: "Cuando la Administración no ejecute sus actos firmes podrán los afectados solicitar su ejecución, y si ésta no se produce en el plazo de un mes de tal petición podrán los solicitantes formula recurso contencioso administrativo...". No se utiliza la expresión imperativa del verbo sino que se afirma que los administrados "podrán" solicitar la ejecución. Y es que no hay que olvidar que la ejecutividad de un acto administrativo firme es consecuencia obligada para la Administración y para los administrados y, por ello, no es disponible ni por unos ni por otros. La falta de ejecutividad de un acto administrativo, sin que medie causa legal o suspensión de la ejecutividad acordada en vía administrativa o jurisdiccional, sólo puede contemplarse como una patología en el funcionamiento de la Administración. Así se



Código Seguro de verificación: y8GUopNszTWpKR+ICw4EXg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws121.juntadeandalucia.es/verificav2/>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	DAVID GOMEZ FERNANDEZ 21/11/2016 10:11:09		FECHA	21/11/2016
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	y8GUopNszTWpKR+ICw4EXg==	PÁGINA	9/22



y8GUopNszTWpKR+ICw4EXg==

desprende de la interpretación conjunta los artículos 56 y 57 de la Ley 30/1992. Ejecutividad de la actividad administrativa contempla también en el plano constitucional por la sentencia del Tribunal Constitucional 78/1996, de 20 de mayo . Pero es que además estos actos tienen que ejecutarse "inmediatamente" salvo los supuestos antes contemplados, según el artículo 94 del mismo cuerpo legal. Estando la Administración Pública dotada de medios legales para imponer la ejecución (artículos 95 a 100). Ejecutividad y ejecutoriedad que no se suspende por la mera interposición del recurso ( artículo 111. 1 de la Ley 30/1992) salvo el supuesto específico de suspensión que en el mismo precepto se contempla.”


Y, a continuación, añade la siguiente reflexión: “Sobre la inactividad y la inexecución la Exposición de motivos afirma lo siguiente.: "En el caso del recurso contra la inactividad de la Administración, la Ley establece una reclamación previa en sede administrativa; en el del recurso contra la vía de hecho, un requerimiento previo de carácter potestativo, asimismo en sede administrativa. Pero eso no convierte a estos recursos en procesos contra la desestimación, en su caso por silencio, de tales reclamaciones o requerimientos. Ni, como se ha dicho, estas nuevas acciones se atienen al tradicional carácter revisor del recurso contencioso-administrativo, ni puede considerarse que la falta de estimación, total o parcial, de la reclamación o el requerimiento constituyan auténticos actos administrativos, expresos o presuntos. Lo que se persigue es sencillamente dar a la Administración la oportunidad de resolver el conflicto y de evitar la intervención judicial. En caso contrario, lo que se impugna sin más trámites es, directamente, la inactividad o actuación material correspondiente, cuyas circunstancias delimitan el objeto material del proceso". Por tanto, de acuerdo con la naturaleza de la ejecutividad y ejecutoriedad de la actuación administrativa y de lo pretendido por el legislador procesal cuando introduce el control de la falta de ejecución como un cauce procesal distinto de la impugnación de la actuación administrativa, el requerimiento no tiene por finalidad la producción de una actuación administrativa, en cuyo caso la falta o ausencia de actuación si haría inadmisibile el recurso, sino que aparece para facilitar el conocimiento, previo al inicio de la acción, en la Administración de su propio mal funcionamiento. Así las cosas, es claro que habiendo tenido ocasión la Administración en sede administrativa para conocer de la existencia de una falta de ejecución de un acto firme, el requerimiento que existe legalmente para cumplir esa finalidad carece de entidad suficiente como para convertirse en obstáculo en el ejercicio del derecho. O, dicho de otra forma, cuando la Administración ha conocido, en nuestro caso sobradamente, la existencia de la falta de ejecución de una resolución firme, porque el beneficiado por ellas y se lo ha comunicado a través de múltiples actuaciones, la ausencia de requerimiento formal no introduce ningún nuevo derecho en la esfera jurídica de la Administración y exigirlo como requisito preprocesal no añadiría nada, salvo, establecer unos limites no razonables en el ejercicio del derecho a la acción. Por ello vamos a desestimar la inadmisibilidad opuesta.”

En todo caso ha de tenerse presente que, conforme a lo reflejado, entre otras, en la Sentencia de la Sección Séptima de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 8 de abril de 2010 (casación 3778/2009), citando la previa de la misma Sala y Sección de 23 de mayo de 2008 (casación nº 3016/2006), si en algún ámbito no procede interpretar restrictivamente las normas que rigen el acceso a la jurisdicción es, precisamente, en el que se refiere a la tutela judicial de los derechos fundamentales y libertades públicas, que la Constitución establece en su artículo 53.2 , que discurra por un procedimiento preferente y sumario, siempre que se cumplan los requisitos válidos para la interposición del recurso por esa vía. Con ello se está aludiendo a la obligación de acentuar en este tipo de procedimiento las exigencias derivadas del principio “pro actione” (propio del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, en



Código Seguro de verificación:y8GUopNszTWpKR+ICw4EXg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws121.juntadeandalucia.es/verifirmav2/>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	DAVID GOMEZ FERNANDEZ 21/11/2016 10:11:09		FECHA	21/11/2016
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	y8GUopNszTWpKR+ICw4EXg==	PÁGINA	10/22



y8GUopNszTWpKR+ICw4EXg==

su vertiente de acceso a la jurisdicción) que implica, conforme a reiterada jurisprudencia (a.e. Sentencias del Tribunal Constitucional 88/1997, de 5 de mayo; 38/1998, de 17 de febrero; 207/1998, de 26 de octubre; 235/1998, de 14 de mayo; 122/1999, de 28 de junio; 195/1999, de 25 de octubre; 205/1999, de 8 de noviembre; 252/2000, de 30 de octubre; 258/2000, de 30 de octubre; 259/2000, de 30 de octubre; 3/2001; 7/2001, de 15 de enero; 24/2001, de 29 de enero; 160/2001, de 5 de julio o 177/2003, de 13 de octubre, entre otras) “la interdicción de aquellas decisiones de inadmisión -o de no pronunciamiento- que por su rigorismo, por su formalismo excesivo o por cualquier otra razón revelen una clara desproporción entre los fines que aquellas causas de inadmisión -o no pronunciamiento sobre el fondo- preservan y los intereses que sacrifican”. Y a tal efecto ha de tenerse en cuenta que, conforme a lo reflejado en la Sentencia del Tribunal Constitucional 182/2004, de 2 de noviembre, una decisión de inadmisión debe ser calificada de excesivamente formalista o desproporcionada cuando el fin que pretende garantizarse mediante el cumplimiento de un requisito formal (en este caso, la solicitud de ejecución de los actos presuntos estimatorios) se hubiera logrado a pesar de haberse incumplido dicho requisito. Consecuentemente, y reiterando que el fin perseguido con el requerimiento o solicitud de ejecución es el de “dar a la Administración la oportunidad de resolver el conflicto y de evitar la intervención judicial” (así lo expone la propia exposición de motivos de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa vigente), la decisión de inadmisión resultaría desproporcionada si, a pesar de no haber mediado solicitud de ejecución (como en este supuesto, sin atisbo de duda al menos en gran parte de los supuestos), la situación fáctica pusiera de manifiesto que el conflicto tampoco habría sido resuelto. Y así sería si la Administración, una vez conocida la existencia del procedimiento judicial, no hubiera procedido a la ejecución de los actos presuntos estimatorios en idéntico plazo de diez días mediante la puesta a disposición del recurrente de la información cuyo acceso fue otorgado por aquellos (evitado de esta forma el conflicto judicial).


**Sexto.-** Trasladando los referidos razonamientos al supuesto de actuaciones, la ejecución de los actos administrativos presuntos firmes que tuvo lugar tras transcurrir cinco días tras la presentación de cada una de las solicitudes de información referidas en el antecedente primero, por los que se concedía al recurrente el derecho de acceso a las mismas, no se había llevado a cabo -al menos en una parte significativa de las presentadas, como posteriormente se razona- varios meses después (a pesar de su inmediata ejecutividad y de no ser esta última disponible -ni para Administración ni administrado-, sino, por el contrario, obligada), sin que la existencia de tal inactividad dependa de la actitud silente de la Administración frente a un requerimiento potestativo del administrado. De la misma forma, no se constata que la puesta a disposición de la información haya tenido lugar en el plazo de diez días desde que la Administración conoció la existencia del procedimiento judicial (lo que, a la vista de lo que consta en del procedimiento especial de Protección de Derechos Fundamentales 121/2016 de los tramitados ante este Juzgado, de cuya desacumulación proviene el presente, tuvo lugar el día 28 de marzo de 2016 -fecha de entrada de requerimiento de solicitud de los expedientes administrativos-), de lo que se desprende que, incluso del caso de haberse instado la ejecución, el conflicto judicial hubiese igualmente existido (por lo que no procede acordar la inadmisión del recurso, por ser desproporcionada dicha decisión).

Consecuentemente, no concurre la causa de inadmisibilidad que se apuntaba en la resolución de 23 de septiembre del corriente, debiendo procederse al estudio de la cuestión de fondo. En esta dirección apunta la Sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-la Mancha de 2 de



Código Seguro de verificación: y8GUopNszTWpKR+ICw4EXg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws121.juntadeandalucia.es/verificav2/>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	DAVID GOMEZ FERNANDEZ 21/11/2016 10:11:09		FECHA	21/11/2016
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	y8GUopNszTWpKR+ICw4EXg==	PÁGINA	11/22



y8GUopNszTWpKR+ICw4EXg==


marzo de 2015 (apelación 139/14), en la que, en su supuesto muy similar al que es objeto de estudio (incluso en cuanto a la defectuosa identificación del acto administrativo impugnado, que igualmente se realizó respecto de una inexistente denegación por silencio del derecho de un Concejal a obtener, al amparo del artículo 14.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, unos informes; cuando realmente lo constituía la ausencia de cumplimiento o ejecución de la autorización concedida por silencio), y en un procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales de la persona, se refiere lo siguiente: “ Lejos de un formalismo extremo que llevaría a la inadmisión del recurso por defectuosa identificación del acuerdo recurrido, hay que entender que lo que los recurrentes solicitan es la ejecución del acuerdo firme de reconocimiento de su derecho a obtener los informes solicitados, sin que haya ningún motivo para no entender admisible esta solicitud. Sería también un formalismo inadmisibles el exigir para ello una nueva solicitud del actor, de cumplimiento de los propios actos firmes de la Administración, cuando ya ha habido una solicitud principal; y ello pese a que el artículo 29.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso- administrativa establezca tal petición previa, pues dicho artículo se refiere al caso de que se pretenda llevar a cabo la ejecución de los actos por ese cauce especial, que supone la ventaja del procedimiento abreviado y de la adopción automática de medidas cautelares artículo 136 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , pero no cuando no se pretende llevar el procedimiento por tal vía privilegiada.”

Alcanzada esta conclusión pudiera suscitarse la duda acerca del alcance de la obligación contemplada en el artículo 29.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, así como de las consecuencias de su incumplimiento. Y, a tales efectos, las Sentencias de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 27 de enero de 2016 (casación 313/2012) y 29 de octubre de 2015 (casación 322/2012), solventan la cuestión en estos términos: “En tal sentido, no podemos olvidar que respecto de los actos ejecutivos de la Administración puede el interesado pedir su completa ejecución al amparo del artículo 29.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , pues esta vía de la Ley es lo que la doctrina ha calificado de auténtica "acción de inejecución". La finalidad del precepto es la especial protección contra la inactividad ejecutiva de procurar una rápida tutela, que no podría lograrse a través del procedimiento ordinario; es más, en estos casos no tendría sentido seguir todos los trámites del proceso administrativo declarativo hasta la sentencia, cuando por existir ya un título ejecutivo con fuerza obligatoria lo que se pretende de la Administración, no es la sentencia de condena sino la ejecución lo que demanda la tutela jurisdiccional efectiva. La acción del artículo 29.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa precisa por tanto, en primer lugar, un acto firme, expreso o presunto, pero también que el interesado solicite expresamente y con total claridad a la Administración su ejecución, solicitud que es un requisito previo inexcusable para que la Administración requerida pueda ejecutar el acto y para que el interesado pueda ejercitar en forma la pretensión del artículo 29.2, de manera que si la petición del afectado no cumple tales requisitos, no podrá luego acudir a esta Jurisdicción en demanda de la pretensión de condena regulada en el artículo 29.2 tan citado, pues esta pretensión requiere el adecuado cumplimiento de ese requisito preprocesal o vía previa de la petición a la Administración de la ejecución del acto firme.”

De tales razonamientos puede desprenderse (no sin ciertas dudas, ciertamente, dada la contundencia de los términos empleados por la Sala Tercera; dudas que, en todo caso, han de ser resueltas atendiendo al principio “pro actione”) que, con carácter general, la existencia del requerimiento regulado en dicho precepto resulta imperativa para el ejercicio



Código Seguro de verificación:y8GUopNszTWpKR+ICw4EXg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws121.juntadeandalucia.es/verificav2/>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	DAVID GOMEZ FERNANDEZ 21/11/2016 10:11:09		FECHA	21/11/2016
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	y8GUopNszTWpKR+ICw4EXg==	PÁGINA	12/22
				
y8GUopNszTWpKR+ICw4EXg==				

de la acción contemplada en dicho precepto, a ventilar por el cauce privilegiado del artículo 78 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Mas igualmente se colige de lo anteriormente razonado que la propia existencia de la inactividad como posible objeto de impugnación o recurso no dependen de su concurrencia previa, así como que el fin que trata de preservarse con la necesaria solicitud de ejecución del acto presunto resultó finalmente cumplido, aun sin mediar la misma. Por ello, la decisión de inadmisión resultaría contraria al principio “pro actione”, por desproporcionada, y vulneraría el derecho a la tutela judicial efectiva del recurrente. En definitiva, el mismo es presupuesto preprocesal inexcusable cuando se pretende ejercitar la referida “acción de inejecución”, pero no es motivo que justifique la inadmisión de un recurso formulado por el cauce del procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales de la persona (que impone extremar las exigencias para denegar el acceso a la jurisdicción) si es objeto de recurso la misma inactividad de la Administración -por no llevar a cabo la ejecución de sus propios actos firmes- y el fin que trata de preservarse con dicho requisito formal se entiende igualmente cumplido (como en este caso), a pesar de no haberse dado cumplimiento al mismo.

**Séptimo.-** Solventadas estas cuestiones previas, ha de exponerse la doctrina constitucional existente respecto del derecho fundamental que se afirma conculcado mediante la inactividad administrativa objeto de recurso, para, de esta forma, dar una respuesta sobre el fondo de la cuestión debatida.


Toda vez que se alega la vulneración del artículo 23 de la Constitución Española en su vertiente de del derecho a la participación en los asuntos públicos, conviene efectuar una serie de precisiones previas. Es doctrina reiterada del Tribunal Constitucional (a.e. Sentencia del Tribunal Constitucional, citando las Sentencias del Tribunal Constitucional 32/1985, 161/1988, 24/1989, 73/1989, 24/1990, 45/1990, 196/1990, 220/1991 de 25 de noviembre y 287/1994 de 27 de octubre, así como el Auto del Tribunal Constitucional 426/1990) la que, en relación con el mencionado derecho e igualmente con respecto al derecho de acceder a los cargos públicos en condiciones de igualdad (contemplado en el mismo precepto), tiene declarado que:

- a) Ambos derechos lo son de configuración legal, correspondiendo por ello a la Ley -concepto en el que se incluyen los Reglamentos Parlamentarios- ordenar los derechos y facultades que correspondan a los distintos cargos y funciones públicas, pasando aquellos, en virtud de su creación legal, a quedar integrados en el status propio de cada cargo. La consecuencia que deriva de ello es que podrán los titulares del mismo defender, al amparo del artículo 23.2 de la Constitución Española, el ius inofficium que consideren ilegítimamente constreñido. De forma singular, y en lo que atañe a esta cuestión, las Sentencias del Tribunal Constitucional 119/1995 y 23/1984 tienen declarado que la interpretación del mentado artículo 23 de la Constitución Española a la luz del artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 (extremo este necesario conforme al párrafo segundo del artículo décimo de nuestra Constitución) necesariamente implica extender el ámbito de aplicación de este precepto a la totalidad los cargos públicos de representación política, ya lo sean del Estado o de los entes territoriales citados en el artículo 137 de la Constitución, es decir, Comunidades Autónomas, Municipios y Provincias.
- b) La calificación de dichos derechos como “de configuración legal” a la que se ha aludido con anterioridad, y que se deduce del inciso final del párrafo segundo del artículo 23 de la Constitución Española cuando se hace alusión a “los requisitos que señalen las



Código Seguro de verificación: y8GUopNszTWpKR+ICw4EXg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws121.juntadeandalucia.es/verificamv2/>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	DAVID GOMEZ FERNANDEZ 21/11/2016 10:11:09		FECHA	21/11/2016
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	y8GUopNszTWpKR+ICw4EXg==	PÁGINA	13/22



y8GUopNszTWpKR+ICw4EXg==



leyes”, no permite, en el caso de los cargos y funciones representativos, aseverar que todos “los requisitos señalados en las Leyes” para su ejercicio formen parte del derecho fundamental tan aludido, sino que tan sólo serán admisibles aquellos que sean congruentes con esa naturaleza (Sentencia del Tribunal Constitucional 24/1990), ya que de otra forma tales derechos quedarían degradados al plano de la legalidad ordinaria (Sentencias del Tribunal Constitucional 287/1994 o 71/1994).

- c) Igualmente es doctrina uniforme y constante la que proclama que tal precepto garantiza no sólo el acceso igualitario a las funciones y cargos públicos, sino también a mantenerse en ellos sin perturbaciones ilegítimas y a que no se les impida desempeñarlos de conformidad con lo que la Ley disponga. Hay por tanto, una estrecha vinculación entre los derechos reconocidos en los apartados primero y segundo del tan citado artículo 23 y el principio democrático, manifestación, a su vez, de la soberanía popular (Sentencias del Tribunal Constitucional 32/1985, 149/1988, 161/1988, 71/1989, 212/1993, 80/1994, 287/1994 o 119/1995, entre otras), siendo que la tutela de los representantes parlamentarios en defensa del ejercicio de sus funciones engloba, de manera inseparable, los dos derechos contenidos en tal precepto. En palabras de la Sentencia del Tribunal Supremo de 31 de enero de 2006, ambos derechos son aspectos de una misma institución, pues los representantes políticos elegidos por los ciudadanos son los que dan efectividad al derecho de estos últimos a participar en los asuntos públicos.
- d) Si bien es cierto que los actos a través de los cuales se articulan las peticiones de información y preguntas de los parlamentarios a los miembros del Gobierno y, en general, todos aquellos que produzcan en el ámbito de las relaciones entre Gobierno y Parlamento, incluidos los autonómicos y locales, agotan normalmente sus efectos en el campo estrictamente parlamentario, dando lugar, en su caso, al funcionamiento de los instrumentos de control político, que excluye, generalmente la fiscalización judicial. Pero ello no excluye que, excepcionalmente, en el desarrollo de esa clase de relaciones pueda vulnerarse el ejercicio del derecho fundamental de los parlamentarios (en este ámbito, de los concejales), bien por el Ejecutivo, bien por los propios órganos de las Cámaras, si se les impide o coarta el ejercicio de la función parlamentaria. Ello no puede suponer la sistemática constitucionalización todos y cada uno de los derechos y facultades que constituyen el Estatuto del parlamentario, sino tan sólo aquellos que deben considerarse pertenecientes al núcleo esencial de la función representativa parlamentaria, como son, principalmente, los que tienen relación directa con el ejercicio de las potestades legislativas y de control de la acción del Gobierno (Sentencia del Tribunal Constitucional 220/1991).


**Octavo.-** Efectuadas estas reflexiones previas, y entrando ya propiamente en el fondo de la cuestión litigiosa, se entiende en la demanda soslayado el derecho fundamental por no haberse otorgado el acceso a la información solicitada por el Concejal demandante en la multitud de escritos presentados ante la Administración , y ello a pesar de la existencia de varios actos administrativos presuntos por los que se le concedía dicho acceso.

Por lo que respecta al derecho de los miembros de las Corporaciones legales a recibir la totalidad de información disponible para el desempeño de su función, el mismo se encuentra regulado, como alegan todas las partes en este procedimiento, en el artículo 77 de la Ley de Bases del Régimen Local, dispone como todos los miembros de las Corporaciones locales tienen derecho a obtener del Alcalde o Presidente o de la Comisión de Gobierno cuantos



Código Seguro de verificación: y8GUopNszTWpKR+ICw4EXg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws121.juntadeandalucia.es/verifirmav2/>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	DAVID GOMEZ FERNANDEZ 21/11/2016 10:11:09		FECHA	21/11/2016
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	y8GUopNszTWpKR+ICw4EXg==	PÁGINA	14/22



y8GUopNszTWpKR+ICw4EXg==

antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la Corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función, siendo que las solicitudes tendentes a recabar tales informaciones habrán de ser resueltas motivadamente en los cinco días naturales siguientes a aquel en que se hubiese presentado. De forma correlativa a los preceptos expuestos, el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales igualmente regula esta cuestión en su artículo 14 que reconoce a todos los miembros de las Corporaciones locales el derecho a obtener del Alcalde o Presidente o de la Comisión de Gobierno cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la Corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función. Las solicitudes de acceso a dicha información, continúa el precepto, se entenderán concedidas por silencio administrativo en caso de que el Presidente o la Comisión de Gobierno no dicten resolución o acuerdo denegatorio en el término de cinco días, a contar desde la fecha de solicitud, debiendo ser motivadas las resoluciones que denieguen el acceso a la información que se solicite.


Estos preceptos configuran un régimen legal de acceso a información que ha de considerarse integrante del núcleo esencial de la función representativa de los cargos electos en el Ayuntamiento, pues sin dicho acceso no resulta posible el correcto ejercicio (y por tanto sin perturbaciones indebidas) de la función de control del Ejecutivo municipal. En este sentido ha de citarse la Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 15 de septiembre de 1987, en la que se reconocía como la obtención de información sobre asuntos de competencia municipal es un medio necesario para que los concejales puedan, con conocimiento suficiente, ejercer las funciones propias de su cargo; o la Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 27 de junio de 1988, en la que se expresa como la negativa a facilitar el acceso a la referida información impide tener conocimiento de cómo se ha llevado a cabo la actuación de los órganos responsables, de forma que la labor de control a desempeñar por los Concejales deviene ineficaz, al no poder conocer qué materia ha de ser objeto de control, y por ende, la participación en los asuntos públicos se quiebra y con ello el derecho fundamental reconocido en el artículo 23.1 de la Constitución Española. Igualmente así lo expresa la Sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha de 18 de febrero de 2010 (apelación 254/09), que recuerda como el acceso a la información es un medio esencial y adecuado para el ejercicio de funciones públicas y su relevancia implica que no se ponga en cuestión la propia racionalidad del funcionamiento del sistema democrático y Estado de Derecho.

**Noveno.-** Extremo distinto, no obstante, es si tal derecho constitucional ampara igualmente el de obtener copias o fotocopias de la información a la que se accede. De forma general ha de recordarse que una constante y consolidada jurisprudencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo (a.e. Sentencias de 19 de julio de 1989, 5 de mayo de 1995, 21 de abril de 1997, 29 de abril de 1998, 14 de marzo de 2000, 16 de marzo de 2001, 30 de noviembre de 2001 -casación 8032/1997-, 4 de junio de 2007-casación 3505/02- o 2 de julio de 2007 -casación 4338/03-) proclama que el derecho de información derivado del artículo 23 de la Constitución no incluye, como contenido propio, el derecho a la obtención de copias o fotocopias, y lo mismo ha de entenderse respecto a las certificaciones o copias legitimadas. En este sentido recuerdan de forma unánime que la facultad de acceso a la información de cualquier expediente o antecedente documental reconocida por la Ley sólo puede obtenerse mediante el libramiento de copias en los casos legalmente autorizados de acceso libre de los Concejales a la información o bien cuando ella sea expresamente autorizado por el Presidente de la Comisión de Gobierno (artículo 16.1.a en relación con el 15 del



Código Seguro de verificación: y8GUopNszTWpKR+ICw4EXg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws121.juntadeandalucia.es/verificav2/>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	DAVID GOMEZ FERNANDEZ 21/11/2016 10:11:09		FECHA	21/11/2016
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	y8GUopNszTWpKR+ICw4EXg==	PÁGINA	15/22



y8GUopNszTWpKR+ICw4EXg==

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales), quedando el derecho de acceso a la información para el ejercicio de la función de Concejal cubierto en el resto de supuestos por el artículo 14 del Reglamento de Organización mencionado, sin que el mismo comprenda el derecho a la obtención de copias. Y ello porque artículo 37.8 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común no es aplicable a los Concejales o miembros de una Corporación Local respecto a los documentos obrantes en los archivos de la Administración municipal, según lo previsto en el apartado 6.f) del propio artículo 37, sin que además el citado artículo apartado octavo contemple un derecho a la obtención indiscriminada de copias o certificados de documentos por los particulares, ya que según el apartado séptimo del citado precepto, el derecho de acceso se ejercitará debiéndose formular petición individualizada de los documentos que se desee consultar, sin que quepa, salvo para su consideración con carácter potestativo, formular solicitud genérica sobre una materia o conjunto de materias; de lo que se colige que no existe norma que consagre el derecho de los Concejales a obtener de modo indiscriminado copias legitimadas o fotocopias de los documentos que integran expedientes completos, a cuyo examen tienen derecho. En este sentido, tal y como expresa la Sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla de 15 de enero de 2008 (recurso 98/2003), citando al respecto las Sentencias de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 19 de mayo de 2003, 13 de junio de 2005, 29 de marzo y 5 de abril de 2006, recuerda como el artículo 37.7 exige con toda claridad que la petición de los documentos que se desee consultar sea individualizada, sin que quepa formular solicitud genérica sobre una materia o conjunto de materias, no pudiendo entenderse tal derecho a obtener información como una facultad ilimitada, debiendo existir un interés particular y concreto con relación a uno o varios documentos previamente determinados, sin que sea admisible que se practiquen peticiones genéricas.

A modo de resumen, y parafraseando la Sentencia de la Sección Séptima de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 28 de enero de 2008 (casación 1130/05), que a su vez cita la previa de 29 de marzo de 2006, puede afirmarse con respecto al derecho de acceso a la información mediante la obtención de copias lo siguiente:


a) El núcleo básico del derecho fundamental de participación política inherente al cargo de concejal se satisface con el derecho a la información y no comprende un derecho a obtener copias de la documentación existente en la Corporación Local.

b) Ese derecho a obtener copias deriva de la normativa de régimen local antes mencionada y no es incondicionado, pero su indebida denegación, cuando es procedente, sí incide en el derecho fundamental de participación política (porque, pese a que se trata de un derecho no derivado de la Constitución sino de la normativa infraconstitucional, lo cierto es que se reconoce como instrumento para ejercer el cargo de concejal).

c) Las condiciones para reclamar ese derecho de obtención de copia son diferentes según el título normativo que sea invocado: cuando se ejercite al amparo de los apartados a) y b) del artículo 15 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, habrá de precisarse el asunto en relación al cual se piden las copias; y cuando lo sea según el apartado c) de ese mismo precepto reglamentario, deberá cumplirse con la exigencia de individualización documental que establece los apartados 7 y 8 del artículo 37 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.



Código Seguro de verificación: y8GUopNsZTWpKR+ICw4EXg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws121.juntadeandalucia.es/verificav2/>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	DAVID GOMEZ FERNANDEZ 21/11/2016 10:11:09	FECHA	21/11/2016
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	PÁGINA	16/22
 y8GUopNsZTWpKR+ICw4EXg==			

d) Cumpliéndose con esas condiciones, no podrá exigirse al interesado que justifique adicionalmente la utilidad o conveniencia de las copias solicitadas para el desempeño de la función de control político que corresponde al cargo de concejal.

e) Recae sobre el Ayuntamiento destinatario de la solicitud de copia la carga de justificar y motivar su denegación. Ello no obstante, el volumen de la documentación cuya copia sea solicitada y la perturbación que su expedición o entrega pueda causar en el funcionamiento de la Corporación Local, en razón de los medios de que esta disponga, es un factor a ponderar en la resolución que haya de dictarse por la Administración, pues no puede olvidarse que asegurar la normalidad de aquel funcionamiento es un imperativo del principio de eficacia que para la actuación de la Administración pública proclama el artículo 103 de la Constitución Española.

**Décimo.-** Aplicando tales consideraciones al supuesto de actuaciones, manifiesto resulta que, toda vez que no se dictó en el plazo de cinco días por parte de la Administración acuerdo motivado denegando el acceso a la información solicitada, existe, desde el transcurso de los cinco días siguientes a cada solicitud, varios actos administrativos (estimatorios presuntos) firmes por los que se accedía a lo solicitado por el Concejal recurrente en los escritos presentados en cada una de las fechas enunciadas en el primer antecedente de hecho. Dichos actos administrativos eran inmediatamente ejecutivos, sin que la ejecución de aquellos quedase supeditada a previas solicitudes de parte (dado el carácter indisponible de dicha ejecución). Consecuentemente, la Administración demandada estaba obligada a facilitar el acceso a las informaciones solicitadas por el recurrente desde el transcurso de los plazos enunciados, en cumplimiento y ejecución de los aludidos actos administrativos.

Dado que nos hallamos ante múltiples actos administrativos, se impone el análisis individualizado de aquellos respecto de la posible ejecución de los mismos por parte de la Administración. Y en este punto resulta cuestionable el tratamiento global que parece dispensado por la actora para la ejecución de todas las solicitudes formalizadas, pues (como incluso se admite en la demanda) no en todos los supuestos se aprecia la misma ausencia de ejecución o, al menos, la misma ha podido acontecer de una manera más o menos tardía o defectuosa. En lo que respecta a la solicitud aludida bajo el epígrafe a) del primer antecedente de hecho (con registro de entrada número MARB-E- 2015062992), a la vista de lo obrante en el expediente ( folios 1 a 7), es cierto que ninguna actuación despliega la Administración desde el 21 de septiembre de 2015 (fecha en la que se remite la petición al Sr. Teniente de Alcalde de San Pedro de Alcántara -folios 2 y 3-) hasta el día 31 de marzo de 2016 (más de seis meses después), fecha en la que por el Concejal Delegado de juventud y fiestas municipal se le pone de manifiesto al recurrente que la información solicitada estaba su disposición en el perfil de contratante de la web municipal, indicándole que los mismos se encontraban en los Departamentos de contratación y bienes del Ayuntamiento (folio 4). Posteriormente, en fecha 11 de abril de 2016 (folio 5 del expediente) se remite al recurrente nota interior confeccionada por la Jefatura de Servicio de contratación, compras centralizadas, gestión de subvenciones y proyectos europeos el día 4 de abril de 2016 (folio 6 del expediente) en el que se le indicaba que podía tener acceso a tres de los cuatro expedientes solicitados previa concertación de citas telefónica. Pues bien, tal y como consta al folio séptimo del expediente administrativo remitido, el día 20 de abril de 2016 se personó en dicho Servicio el Sr. Letrado del recurrente -ha de entenderse que como



Código Seguro de verificación: y8GUopNszTWpKR+ICw4EXg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws121.juntadeandalucia.es/verifirmav2/>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	DAVID GOMEZ FERNANDEZ 21/11/2016 10:11:09	FECHA	21/11/2016
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	PÁGINA	17/22



y8GUopNszTWpKR+ICw4EXg==

representante del recurrente, conforme al artículo 32 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común-, otorgándosele vista de los referidos expedientes, a los que tuvo acceso en dicha fecha. Es cierto que igualmente se hace constar como se solicitó copia de los expedientes y que “siguiendo instrucciones verbales de Alcaldía” las mismas no se facilitaron. Pero igualmente lo es que, tal y como previamente se ha referido, el acto administrativo presunto estima to a otorgaba el derecho al acceso a la información, que no a la obtención de copias. De igual forma, y tal y como previamente se referido, es cierto que aun cuando el núcleo básico del derecho fundamental de participación política inherente al cargo de concejal se satisface con el derecho a la información, y, por tanto, no comprende el de obtener copias de la documentación existente en la Corporación Local; no lo es menos la denegación indebida a tal derecho, cuando es procedente, puede incidir en el derecho fundamental de participación política. Mas a tal efecto ha de comprobarse qué título normativo resultó invocado por el Concejal (apartados a) o b) del artículo 15 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, o apartado c) del mismo precepto) y si se cumplieron los condicionantes requeridos según uno u otro (precisarse el asunto en relación al cual se pedían las copias y llevarse a cabo la necesaria individualización documental), pues solo en tal caso podrá constatarse la vulneración de tal derecho fundamental. Toda vez que nada consta al folio séptimo del expediente, ni nada al respecto se razona la demanda, no puede entenderse que el no haberse expedido las correspondientes copias comportase la vulneración del derecho fundamental. De la misma forma, y aun cuando en la fecha indicada (20 de abril de 2016) no se tuvo acceso al expediente correspondiente a las casetas y barras, lo cierto es que de la lectura del documento 20 de la demanda se constata como se facilitó el acceso y copia a dicho expediente en fecha 5 de mayo de 2016, tras ser remitida a Alcaldía por la Concejalía delegada de juventud y fiestas el día 25 de abril de 2016.

Por tanto, habiendo tenido el recurrente acceso a la información solicitada con antelación a la presentación del recurso (lo que tuvo lugar el 17 de mayo de 2016), no puede sino concluirse que ha sido objeto de recurso una inactividad inexistente en dicho momento (precisamente por haberse otorgado acceso a la información solicitada, lo que comporta la ejecución del acto administrativo positivo tan referido) y que el recurso ha de ser desestimado. Ciertamente es que la fecha de dicho acceso es posterior a aquella en la que el recurrente (junto con otros Concejales) presentó por primera vez un escrito de interposición de recurso ante los Juzgados (en un escrito en el que pretendían acumularse más de 50 recursos frente a la inactividad municipal) denunciando tal circunstancia; pero no es menos cierto que, una vez ordenada por este Juzgado la interposición separada de los recursos (decisión judicial no recurrida), y antes de llevar a cabo la misma, el acceso a la información referida se verificó. Consecuentemente, el 17 de mayo de 2016 se formuló frente a una ya inexistente inactividad administrativa.

Idéntica respuesta merecen la supuesta ausencia de ejecución de las solicitudes de información aludidas bajo los epígrafes k) y m) del primer antecedente de hecho (con números de registro de entrada MARB-E- 2015072639 y MARB-E- 2016025116). Tal y como consta al documento 16 de la demanda, la actuación municipal se limitó, en un principio, a remitir la petición al Sr. Teniente de Alcalde de San Pedro de Alcántara el día 26 de octubre de 2015. Más igualmente consta al documento número 18 (en este caso, igualmente al folio 40 del expediente administrativo) como el día 31 de marzo de 2016 se da traslado al Concejal recurrente de contestación al información solicitada en dicho escrito (esto es, que la ampliación a la que aludía no resultaba necesaria puesto que la fecha de



Código Seguro de verificación: y8GUopNszTWpKR+ICw4EXg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws121.juntadeandalucia.es/verificarmav2/>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	DAVID GOMEZ FERNANDEZ 21/11/2016 10:11:09	FECHA	21/11/2016
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	PÁGINA	18/22



y8GUopNszTWpKR+ICw4EXg==



cesión se incluían los días necesarios para el acondicionamiento de las parcelas, montajes y desmontaje desde las instalaciones). Por tanto, a la fecha de interposición del recurso la referida inactividad resultaba ya inexistente. Y, de la misma forma, debe entenderse respondida la solicitud de acceso al inexistente procedimiento de ampliación (que no resultaba necesaria, tal y como ya expuso la Administración) formalizada mediante descrito aportado al documento 20 y que se alude al epígrafe m) del primer antecedente de hecho. Consecuentemente, el recurso ha de ser igualmente desestimado respecto de dichas supuestas inactividades.


Son supuestos similares a los aludidos los que respecta a las solicitudes aludidas bajo los epígrafes c) y h) del primer antecedente de hecho (con registros de entrada números MARB-E- 2015068850 y MARB-E- 2015068825), aunque los mismos deben correr suerte diferente. Por lo que respecta al primero de los enunciados, conforme consta a los folios 36 a 40 del expediente, la Administración se limitó a remitir la petición al Sr. Teniente de Alcalde de San Pedro de Alcántara el mismo día de su presentación -folio 37-, sin que hasta el día 1 de abril de 2016 contestase la solicitud (tal y como consta al folio 39). Sin embargo, la contestación se limita a indicar la delegación municipal en la que se encuentra el expediente, pero ni se verifica el acceso del Concejal recurrente al expediente de contratación al que aludía en su solicitud, ni tampoco se le informa de la empresa que estaba llevando a cabo los trabajos referidos en aquella. Como puede constatar, aún cuando existe una contestación previa a la interposición de este recurso, la misma no da cumplida satisfacción a lo exigido por el acto administrativo presunto estimatorio. De la misma forma, y por lo que respecta al segundo, conforme consta en la documental aportada como número 12 por la parte actora (pues respecto del mismo ninguna documental se incluye en el expediente administrativo), la Administración se limitó a remitir la petición al Sr. Teniente de Alcalde de San Pedro de Alcántara el mismo día de su presentación, sin que hasta el día 1 de abril de 2016 realizase ninguna otra actuación. En este caso, la misma se ha limitado a remitir copia de la solicitud a la Delegación de seguridad ciudadana, sin que, consecuentemente, a pesar de existir una actividad municipal previa a la interposición de este recurso, la misma de cumplida satisfacción a lo exigido por el acto administrativo presunto estimatorio (el acceso a los planes en su día requerido). Por ello, y a diferencia de lo expuesto respecto de las solicitudes anteriores, el recurso formulado ha de prosperar en lo que respecta a la inactividad administrativa a la que se ha hecho mención.

**Undécimo.-** En lo que respecta a las solicitudes aludidas bajo los epígrafes b), e) y f) del primer antecedente de hecho (con registros de entrada número MARB-E- 2015062995, MARB-E- 2015068844 y MARB-E- 2015068839), a la vista de lo obrante en el expediente (folios 27 a 35, sin que, sin explicación plausible, conste copia del escrito con registro de entrada MARB-E- 2015062995 ni la actuación administrativa seguida a raíz del mismo) y de lo aportado por la parte actora (documento número1), se comprueba como la Administración se ha limitado a trasladar las solicitudes de información al Sr. Teniente de Alcalde de San Pedro de Alcántara en fechas 15 de septiembre y 7 de octubre de 2015, y a emitirse por las Concejalías-Delegadas de Juventud y fiestas y Sostenibilidad sendas contestaciones en fecha 17 de septiembre de 2015, por la que se limitan a exponer, de un lado, la existencia de alta carga de trabajo que impedía dar acceso a la solicitud, y, de otro, la ausencia de gestiones realizada por la última de las Concejalías citadas. Desde este momento y hasta la presentación del recurso (e incluso hasta el momento del dictado de la Sentencia, pues ninguna documental se aporta la Administración que ponga de manifiesto un acceso posterior) no se ha llevado a cabo actuación alguna por parte de la Administración para facilitar el acceso en su día concedido. Consecuentemente, el recurso ha de ser



Código Seguro de verificación: y8GUopNszTWpKR+ICw4EXg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws121.juntadeandalucia.es/verifirmav2/>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	DAVID GOMEZ FERNANDEZ 21/11/2016 10:11:09		FECHA	21/11/2016
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	y8GUopNszTWpKR+ICw4EXg==	PÁGINA	19/22



y8GUopNszTWpKR+ICw4EXg==

íntegramente estimado respecto de la inactividad aludida en relación con la solicitudes previamente enunciadas.

Por lo que respecta, por su parte, a la solicitud aludida bajo el epígrafe d) del primer antecedente de hecho (con registro de entrada número MARB-E- 2015068831) consta a los folios 15 a 25 como, tras acordar la Administración el traslado de la solicitud al Sr. Teniente de Alcalde de San Pedro de Alcántara el mismo día de presentación de aquella -folios 16 y 17-, la única actuación administrativa que consta en el expediente es una supuesta contestación contenida al folio 18 (fechada el 30 de marzo de 2016 y notificada el 1 de abril del mismo) conforme a la cual la información le había sido contestada al recurrente en el Pleno celebrado el 30 de octubre de 2015. Se aporta copia parcial a los folios 22 a 25 de las intervenciones de dicho Pleno de cuya lectura, y en contra de lo que sostiene la Alcaldía, no se desprende que tal contestación haya sido satisfactoria. En primer lugar porque se solicitaba la exposición de los motivos a los que obedecían los trabajos que venían realizándose en la parcela en la que en ediciones pasadas se ubicaron las casetas de la feria. Y examinado el contenido de la copia parcial remitida se comprueba que a tal cuestión (sí a otras distintas) no se hizo más mención que la genérica siguiente: “decirle que su solicitud de información, bueno usted conoce la Delegación y conoce el personal de la Delegación (sic) es bastante escaso para la cantidad de trabajo que se saca y bueno ya le respondí en esa línea y una vez que termine toda la feria y todo el archivo y toda la documentación pues no tendremos ningún problema en que usted acceda a esa información, también en los términos en los que le ha dicho el [REDACTED] -folio 25-. Y en segundo lugar, porque igualmente se solicitaba copia del expediente en la que costase la autorización de la propiedad del terreno para realizar dichos trabajos, resultando manifiesto que el acceso a tal expediente no se facilitó en el curso del Pleno aludido. Por ello, el recurso ha de ser estimado respecto de la inactividad aludida.

En lo atinente a la solicitud aludida bajo el epígrafe j) del primer antecedente de hecho (con registro de entrada número MARB-E- 2015072631) consta al documento 14 de la demanda (inexplicablemente, no se contiene en el expediente remitido ni la solicitud ni las actuaciones municipales posteriores) como, tras presentar el demandante su solicitud el día 23 de octubre de 2015, la Administración se limitó a acordar, el día 26 de octubre, el traslado de la solicitud al Sr. Teniente de Alcalde de San Pedro de Alcántara, sin que ninguna actuación adicional se desprenda del expediente respecto de la misma. Es cierto que parte de la solicitud de información pueden entenderse ya facilitada en el ya referido Pleno de 30 de octubre de 2015, ya que en el transcurso del mismo se explicitaron las razones del desalojo del recinto ferial en la madrugada del 18 de octubre de 2015 (en concreto, según consta al folio 24, amenaza de fuerte lluvia). Sin embargo, no se refirió en el discurrir del mismo ni si se realizaron informes por parte de la policía local, cuerpo de bomberos y protección civil acerca del desalojo (obviamente tampoco se efectuó la entrega de copia de los mismos, caso de existir) ni se mencionó la identidad concreta de los mandos de policía local, cuerpo de bomberos y protección civil en ese momento. Por ello, habiendo transcurrido a fecha de presentación del recurso más de seis meses desde que la solicitud debía entenderse estimada por silencio, sin que conste la ejecución de dicho acto, procede estimar el recurso respecto de dicha inactividad.

Por último (y al ser muy similar la situación, como se expondrá), en lo que respecta a las solicitudes aludidas bajo los epígrafe g), l) e i) del primer antecedente de hecho (con números de registro de entrada MARB-E- 2015068828, MARB-E- 2015069933 y MARB-E- 2015072629), del estudio de los documentos 10, 13 y 21 de la demanda (tampoco de



Código Seguro de verificación: y8GUopNszTWpKR+ICw4EXg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws121.juntadeandalucia.es/verifirmav2/>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	DAVID GOMEZ FERNANDEZ 21/11/2016 10:11:09	FECHA	21/11/2016
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	PÁGINA	20/22



y8GUopNszTWpKR+ICw4EXg==

dichas solicitudes y actuación posterior existe rastro en el expediente), la actividad municipal se limitó, en cada ocasión, a dar traslado de dichas solicitudes al Sr. Teniente de Alcalde de San Pedro de Alcántara, sin que posteriormente conste la existencia (al menos no figura ni en el expediente ni nada se ha alegado ni aportado en la contestación a la demanda) de ejecución de los actos producidos por silencio, bien facilitando la información, o bien emplazando al demandante a comparecer en alguna dependencia municipal -en día y hora concreta- para que tuviera lugar el acceso a la misma. Consecuentemente, el recurso ha de ser igualmente estimado respecto de la inactividad referida.

Consecuentemente, y constatándose la existencia de inactividad administrativa vulneradora del derecho fundamental reconocido en el artículo 23 de la Constitución Española del Concejal recurrente (que solicitaba tal información para poder ejercer la oportuna función de control del gobierno municipal, sin que la misma haya realizado actuación alguna tendente a facilitar tal acceso durante un plazo muy prolongado -ni tan siquiera a día de hoy consta el acceso a las informaciones a las que se alude-, a pesar de haberse estimado su solicitud) en lo que respecta a las inactividades referidas en los epígrafes b), c), d), e), f), g), h), i), j) y l) del primer antecedente de hecho, el recurso ha de ser estimado respecto de aquellas, con las consecuencias legalmente inherentes. Sin embargo, por las razones previamente aludidas, el recurso ha de ser desestimado respecto de las inactividades identificadas en los epígrafes a), k) y m) del mismo antecedente, con las consecuencias legalmente inherentes (singularmente, que la estimación de la demanda es tan solo parcial).

**Duodécimo.-** Establece el artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa tras su reforma por la Ley 37/2011, aplicable a este procedimiento por razones temporales, que en primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho; añadiendo que en los supuestos de estimación o desestimación parcial de las pretensiones, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, salvo que el órgano jurisdiccional, razonándolo debidamente, las imponga a una de ellas por haber sostenido su acción o interpuesto el recurso con mala fe o temeridad. Procede declarar que cada parte abone las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad. En primer lugar por ser tan solo parcial la estimación de la demanda. Y, en segundo lugar, por la concurrencia de serias dudas de derecho. El solo dictado por este Juzgado de la Providencia de 23 de septiembre suscitando la posible concurrencia de causas de inadmisibilidad que finalmente no se acogen (tras extensos razonamientos y cohonestando pronunciamientos judiciales aparentemente divergentes), unida a la escasa claridad respecto de la identificación de la actuación impugnada por parte de la actora (que igualmente han provocado correlativas alegaciones en la contestación a la demanda presentada) comporta la existencia de las referidas serias dudas de derecho, que justificarían la ausencia de imposición de costas procesales incluso aun cuando la estimación de la demanda hubiera sido íntegra.

Vistos los precitados artículos y demás de general y pertinente aplicación.


### FALLO

Que debiendo estimar y estimando parcialmente el recurso contencioso administrativo interpuesto por la Procuradora Sra. Berjano Albert, en nombre y representación de D.



Código Seguro de verificación: y8GUopNszTWpKR+ICw4EXg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws121.juntadeandalucia.es/verificav2/>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	DAVID GOMEZ FERNANDEZ 21/11/2016 10:11:09		FECHA	21/11/2016
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	y8GUopNszTWpKR+ICw4EXg==	PÁGINA	21/22

  
y8GUopNszTWpKR+ICw4EXg==

[ ] frente a la inactividad consistente en la ausencia de ejecución de los actos administrativos presuntos estimatorios por los que se accedía a las pretensiones formalizadas por aquel y que han sido identificadas en los epígrafes b), c), d), e), f), g), h), i), j) y l) del primer antecedente de hecho de la presente; debo declarar y declaro que la misma no es conforme a derecho, por vulnerar el derecho fundamental del Concejal demandante al acceso a la información recogido en el artículo 23 de la Constitución Española. Se desestiman el resto de pretensiones contenidas en la demanda.


Cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que no es firme y que frente a la misma podrán interponer recurso de apelación en el plazo de quince días ante este mismo Juzgado. La interposición de dicho recurso precisará la constitución de un depósito por importe de 50 Euros el cual habrá de efectuarse en el “Cuenta de Depósitos y Consignaciones” que este Juzgado tiene abierta en la entidad bancaria BANESTO cuenta nº [ ], debiendo acreditarse la constitución del mismo en el momento de la interposición, en virtud de lo dispuesto en la Disposición Adicional decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial introducida por la Ley orgánica 1/2009, de 3 de Noviembre, y ello con las exclusiones previstas en el apartado quinto de dicha norma, quedando también excluidos los que tengan concedido el derecho a la asistencia jurídica gratuita.

Así, y por esta mi Sentencia, lo dispongo mando y firmo. David Gómez Fernández, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número cuatro de los de Málaga.



Código Seguro de verificación: y8GUopNszTWpKR+ICw4EXg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws121.juntadeandalucia.es/verifirmav2/>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	DAVID GOMEZ FERNANDEZ 21/11/2016 10:11:09		FECHA	21/11/2016
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	y8GUopNszTWpKR+ICw4EXg==	PÁGINA	22/22
 y8GUopNszTWpKR+ICw4EXg==				